

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 18º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-3998-2024
CARATULADO : TRITINI/FISCO DE CHILE - CONSEJO DE
DEFENSA

Santiago, diecisiete de marzo de dos mil veinticinco

VISTOS:

A folio 1, comparece don Sebastián Varela Medina y doña Nicole Riquelme Rivas, abogados, compareciendo en representación de don Edgardo Alexis Tritini Lillo, dueña de casa (sic), todos domiciliados en Paseo Bulnes 108, oficina 73, de la comuna y ciudad de Santiago, deduce demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad del Estado en contra del Fisco de Chile, representada legalmente por el Consejo de Defensa del Estado, representado a su vez por doña Ruth Ernestina Israel López, abogada, ambos domiciliados en calle Agustinas n°1225, piso 4, comuna de Santiago, o por quien le subroque o reemplace legalmente.

Funda la demanda en base al relato del actor, el cual pasa a transcribirse a continuación:

“El dolor y la desesperación que siento en la actualidad tienen sus raíces en el 2 de julio de 1987, cuando contaba con tan solo 18 años y formaba parte activa de las Juventudes Comunistas. En aquellos días, vivía en la población Villa Sur, ubicada en la comuna de San Miguel (hoy parte de Pedro Aguirre Cerda). Pero todo cambió drásticamente alrededor de las 20:30 horas de aquel 2 de julio. En ese momento, me dirigía hacia el interior de la población para participar en una reunión junto a otros compañeros militantes.



Foja: 1

En la reunión, uno de mis compañeros me presentó a un joven que manifestaba un fuerte interés en unirse a las Juventudes Comunistas. Después de una breve conversación, me retiré de ese domicilio en su compañía. Mientras caminábamos a paso lento, le proporcionaba una introducción a nuestras actividades. Sin previo aviso, al llegar a la intersección de las calles Aristóteles con Platón, fuimos abordados por un grupo de Carabineros pertenecientes a la comisaría Dávila.

"A ver, ¿en qué anda el par de huevoncitos?" preguntó uno de los carabineros, registrándome los bolsillos y hallando un documento que era una especie de acta de la reunión en la que acababa de participar. Este contenía además instrucciones sobre nuestras futuras actividades. Una vez que descubrieron mi militancia, me subieron al carro policial junto a mi acompañante. En el interior del vehículo, fui víctima de fuertes golpes, insultos y amenazas.

Me trasladaron a la comisaría Dávila para encerrarme en el calabozo, siendo brutalmente golpeado con puños y palmas durante todo el trayecto. Me sentía aturdido y, sobre todo, lleno de miedo, ya que los golpes no cesaban. En mi cabeza, solo imaginaba la posibilidad de ser asesinado en el calabozo, sin recibir auxilio de nadie. Dentro del calabozo, me informaron que sería interrogado por agentes de OS4, siendo enfáticos al señalar que ellos serían los encargados de hacerme decir toda la verdad, que sabían bien cómo hacerlo. Aquello me aterrorizó, al imaginar el infierno que me esperaba una vez que llegaran esos sujetos.

Pasé toda la noche en ese calabozo, sin poder conciliar el sueño. Fui constantemente vigilado por los carabineros de turno, quienes se reían de mí y golpeaban los barrotes de la celda para que no durmiera, al mismo tiempo que me amenazaban diciendo que los agentes de OS4 estaban por llegar. A la mañana siguiente, llegó un grupo de hombres vestidos con un gamulán color café claro; otro llevaba puesta una chaqueta azul, y uno de pelo corto portaba una polera café y un gorro con visera.



Foja: 1

Me sacaron a punta de patadas y golpes de puño del calabozo para llevarme hasta la oficina de archivos de la comisaría. Allí, me amenazaron con aplicarme aberrantes torturas, apuntándome en la cabeza con sus pistolas y advirtiéndome que, si no confesaba mi participación en el FPMR o las J.J.C.C., me matarían y arrojarían mi cuerpo al peladero del sector (actualmente Parque André Jarlan). Acto seguido, sacaron una máquina con cables que a todas luces parecían destinados a torturas mediante golpes de electricidad, lo que fue confirmado por los agentes amenazándome de que, si me negaba a hablar, no solamente yo sufriría con esos cables, sino que también buscarían a mi familia y le harían lo mismo. Sin piedad alguna, comenzaron a aplicarme golpes de corriente en diversas partes del cuerpo, mientras yo gritaba y suplicaba desesperadamente; estuve a punto de perder la conciencia cuando repentinamente se detuvieron.

Según ellos, venían muy cansados ya que el día anterior habían estado largas horas torturando a un grupo de personas en San Bernardo, así que harían una pausa para desayunar y luego volverían conmigo para continuar nuestra “conversación”, como le llamaron a tan inhumano trato. Me tomaron nuevamente para encerrarme en el calabozo y oí el sonido del teléfono. Luego de ese llamado, los agentes del OS4 se retiraron raudamente y no volvieron a la comisaría; a pesar de ello, la angustia y el shock se intensificaron, ya que toda esa escena me resultaba tan incomprensible como cruel.

Al anochecer, fui llevado una vez más hasta la oficina de archivos de la comisaría; sentía mucho miedo por lo que ahí me harían. En la habitación me esperaba un médico que procedió a revisarme minuciosamente; luego me obligaron a firmar un documento donde declaraba encontrarme detenido en aquella comisaría y que hasta la fecha me encontraba en perfectas condiciones, sin signos de maltrato. En ese documento también figuraba una orden para entregarme a la CNI; cuando leí eso, sentí un frío que me recorrió el cuerpo y el miedo que hasta ese entonces sentía se intensificó como nunca.



Foja: 1

Luego de la revisión, tres agentes de la CNI me subieron a un vehículo Peugeot. Uno era un tipo moreno de baja estatura, otro de pelo rubio de tez blanca y un tercero también rubio y de baja estatura. Al subir al vehículo, comenzaron a burlarse de mí y a amenazarme con aplicarme torturas tan violentas que me harían hablar de inmediato. El trayecto terminó en el Cuartel General de la Policía de Investigaciones, ubicado en General Mackenna #1370, en la comuna de Santiago. Me sacaron del vehículo con patadas y palmetazos para conducirme hasta el subterráneo del cuartel, donde me amenazaron con amarrarme a una cama y aplicarme golpes de corriente en todo el cuerpo, lo que se conocía como "la parrilla".

“¿Para qué vamos a destrozarte el cuerpo?”, me preguntó uno de los agentes. Me golpearon con la palma de sus manos y, mientras se burlaban de mí, me llevaron a una celda del cuartel que estaba iluminada por una gran luz reflectora que me impedía dormir; temblaba de miedo y le pedía a Dios que no le pasara nada a mi familia. El calabozo era un lugar húmedo y muy oscuro, era imposible lograr conciliar el sueño en tales condiciones. A cada rato pasaban agentes de la CNI golpeando los barrotes, insultándome y llamándome comunista. Además, se reían de las condiciones de la celda, ya que el único lugar que no estaba iluminado por el reflector era donde había un baño improvisado. En caso de querer recostarme ahí, tendría que soportar los repugnantes olores que emanaban.

En la mañana siguiente, vi cómo traían a un joven en muy malas condiciones a la celda contigua a la mía. El joven venía muy golpeado, se notaba que había sido torturado por largas horas y ni siquiera podía comer por su cuenta; fue traumatizante ver a un hombre tan joven en esas condiciones. Lo arrojaron a la celda, sentí el duro impacto de su cuerpo con el suelo y eso me hizo temblar. Uno de los agentes que lo traía me miró y dijo: “te espera lo mismo”. Fue difícil contener el miedo y las lágrimas al ver esa situación, la imagen de ese joven es algo que hasta el día de hoy no puedo borrar de mi cabeza y veía más cierta que nunca la posibilidad de terminar en las mismas condiciones.



Foja: 1

Pasé varios días encarcelado en el cuartel, donde diariamente se repetía una rutina de violentos interrogatorios y amenazas de torturas. Se burlaban mucho por mi condición de detenido, incluso el Jefe de la Brigada de Asalto de la PDI, llamado Sergio Oviedo, emitía constantemente comentarios muy ofensivos y burlescos en mi contra. Cada segundo que permanecí en esa celda estuvo cargado de un profundo miedo por mi vida, nunca dejaron de amenazarme y de reírse por estar encerrado; para ellos yo era cualquier cosa menos un ser humano.

Cuando decidieron liberarme, me llevaron a una sala oficina del cuartel, donde me estaban esperando agentes de la CNI que eran distintos a quienes me habían interrogado durante todos los días. Me miraron de pies y cabeza y me ordenaron girarme con la vista hacia la pared, mientras ellos conversaban en voz baja. Una vez que terminaron con su diálogo, me advirtieron que estarían vigilándome y que pronto recibiría un llamado de la CNI para actuar como infiltrado en organizaciones de izquierda bajo su protección, y en caso de no aceptar ese acuerdo, no me liberarían.

El miedo a las torturas y, sobre todo, a la muerte, me motivó a responder afirmativamente a la condición que me impusieron, pero bajo ningún respecto estaba dispuesto a servir a la dictadura. Así fue como me liberaron y pude regresar a mi hogar, pero mi familia y algunos miembros de la Sociedad Chilena de Derechos Humanos me recomendaron que, por mi seguridad y la de mi familia, era mejor que me ocultara por algún tiempo. Debí mudarme a casa de mi tío Waldo Rodríguez en la comuna de La Cisterna. Estuve casi tres meses en su casa; sin embargo, sentía un miedo constante a que en cualquier momento allanaran la casa de mi tío y me detuvieran por haber incumplido mi "compromiso" con la CNI.

A pesar de estar resguardado en casa de mi tío, vivía con miedo constante. Temía por la seguridad de mi familia y también por la de mi tío, ya que podría ser duramente castigado y acusado como "cómplice" al darme refugio. La posibilidad de que él sufriera represalias me llenaba de terror cada minuto. Ya no tenía la opción de llevar una vida normal; todo lo sucedido marcó un antes y un después, un camino sin retorno que, de



Foja: 1

cierta manera, puso fin a la vida que llevaba. No me atrevía a salir a la calle, incluso sentía miedo de mirar por las ventanas. Por esta razón, dejé de participar en las Juventudes Comunistas, sabiendo que si volvían a verme en la calle, sería detenido una vez más y, esta vez, podría no regresar con vida.

Su Señoría, enfrentar la vida en un estado perpetuo de alerta, miedo y persecución resulta sumamente difícil y doloroso. Después de mi detención, la ansiedad se apoderó de mí, ya que cualquier actividad que implicara abandonar mi espacio seguro la consideraba peligrosa. Era imposible relajarme; incluso en la mesa a la hora del almuerzo, observaba todo con gran desconfianza, lo que afectaba significativamente mi calidad de vida. A veces, llegué a sospechar de mi propio tío, temiendo que pudiera delatarme o que algún vecino conociera mi situación. Esta desconfianza me llevó a aislarme cada vez más, convirtiéndome en una persona solitaria y melancólica. Conciliar el sueño se volvía una tarea difícil y, a veces, imposible, debido a la ansiedad constante y la preocupación por mi familia.

Esa amenaza de vigilancia por parte de los agentes del estado no quedó simplemente en palabras. Poco antes de abandonar la casa de mi tío, cuando finalmente me atreví a salir a algún almacén cercano, fui abordado por un "vecino" del sector. Este individuo comenzó a hablarme detalladamente sobre mi detención, proporcionando información tan específica que resultaba imposible que él conociera los detalles, como el lugar y las personas que me interrogaron. Este encuentro me impactó profundamente, ya que revelaba una vigilancia detallada y personalizada sobre mi vida. Rápidamente regresé a casa de mi tío, abrumado por el miedo y la desesperación ante la persecución que estaba viviendo, desencadenando un pánico descontrolado en mí.

En este punto, parecía que la posibilidad de retomar una vida normal se desvanecía por completo. La constante amenaza de vigilancia y la perspectiva de enfrentar otra detención me atormentaban en cada paso, incluso mientras cursaba mis estudios universitarios en 1988. En abril de ese año, cerca de mi universidad, presencié un vehículo que se desplazaba



Foja: 1

lentamente, y en su interior pude reconocer al conductor: era uno de los agentes de la CNI que me había interrogado. Además, en agosto de ese mismo año, cerca del Departamento de Alemán de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, fui abordado por funcionarios de la PDI que intentaron detenerme. Afortunadamente, la intervención de algunos profesores de la universidad evitó que esto sucediera.

Como podrá apreciar, Su Señoría, se me negó la posibilidad de vivir como un ciudadano normal. Nunca pude caminar tranquilo por la calle; cualquier ruido estrepitoso me hacía entrar en un estado de alerta constante. He vivido años con el miedo a allanamientos y detenciones, sufriendo también con problemas para conciliar el sueño, donde me invaden pesadillas en las que agentes de la CNI irrumpen en mi casa y me llevan detenido. Solo mediante tratamiento psicológico pude, en parte, mitigar este trastorno del sueño, pero la verdad es que uno nunca se recupera por completo de eventos tan violentos y traumatizantes.

Su Señoría, hoy clamo por justicia. En la actualidad, sigo siendo ese joven al que le arrebataron su seguridad y la posibilidad de desarrollarse plenamente en el aspecto social, laboral, educativo e incluso afectivo. Nunca pude construir una familia; la ilusión de encontrar una esposa y tener hijos se vio truncada por el miedo de que algo les pudiera pasar debido a mi militancia política. Soy una persona infeliz, un hombre que no se siente pleno y que carga en la actualidad con el estigma de la discriminación y las secuelas psicológicas de la violencia desmedida de una dictadura implacable y un estado que me abandonó cuando debía ser el garante de mis derechos”.

En cuanto al derecho indica que el artículo 38 inciso 2° de la Constitución Política de la República, señala que, cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por el Estado podrá reclamar ante los tribunales de justicia, consagrando una verdadera acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad de los organismos del Estado, cuando estos por su actividad provoquen un daño a una persona, ya sea natural o jurídica.



Añade que, este conjunto de normas y principios no han hecho sino reconocer aquello que a nivel internacional se ha venido desarrollando por más de un siglo. En efecto, concepciones tales como bien común, la superioridad ontológica de la persona frente al Estado o la dignidad humana como límite a la soberanía estatal, formaban ya parte integrante del corpus iuris internacional conformado por el derecho internacional humanitario, así como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del cual el Estado de Chile forma parte. El Estado de Chile mediante la suscripción de declaraciones y convenciones a nivel internacional, así como concurriendo con su voto en la aprobación de múltiples resoluciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estado Americanos, o bien mediante la vigencia de la costumbre internacional y los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas (Art. 38 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia) ha ido adquiriendo de forma progresiva una serie de obligaciones que responden a la obligación general de respeto de los derechos esenciales del hombre por parte de los Estados. Tal obligación se desprende del preámbulo y, entre otros, de los artículos 3.K, 16, 17, 32, 44, 45, 46 y 136 de la Carta de la Organización de los Estado Americanos, en concordancia con los preceptos de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Precisa que, la correcta resolución del caso sub lite requiere la aplicación armónica de la Constitución Política, de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y de la Ley de Bases de la Administración del Estado. A contrario sensu, en este conflicto son improcedentes las reglas propias del derecho de daños contenidas en el Código Civil, toda vez que dicho estatuto, como es fácil comprender, se construye sobre premisas y principios diferentes a los del derecho público y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, constituyendo un error de lógica y sistemática jurídica la aplicación de normas de derecho privado a las situaciones en que se persigue la responsabilidad del Estado por actos



Foja: 1

dañosos, ya que ambos difieren en su naturaleza y fines, destinado a otras conductas e intereses. (Al respecto, pueden revisarse además los artículos 27 y 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados).

Afirma que, en el caso de autos existe un daño de carácter moral que se expresa en dolor, sufrimiento, angustia, sensación de pérdida, rabia e impotencia ante una situación injusta e ilegítima. Esto es indudablemente un daño moral, el cual, según la dogmática jurídica y la jurisprudencia nacional e internacional, amerita ser reparado, mediante la indemnización.

Concluye en mérito de lo expuesto y dispuesto en las normas legales que cita, solicitando tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios en contra del Estado de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del estado ya individualizado, por la suma de \$250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos) a don Edgardo Alexia Tritini Lillo, con ocasión de los crímenes cometidos por parte de agentes del Estado de Chile, o bien, lo que esta Judicatura determine en Justicia y equidad. Asimismo, que la cantidad demandada deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC desde la fecha de interposición de esta demanda hasta el pago efectivo de la indemnización que en definitiva se establezca, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período y las costas de la causa.

A folio 8, don Marcelo Chandía Peña, Abogado Procurador Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, ambos domiciliados en Agustinas N° 1225, piso 4°, Santiago, Región Metropolitana, contesta la demanda, requiriendo su total rechazo, ello mediante las excepciones, alegaciones y defensas que expone.

Opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado el demandante. Expresa que el Estado de Chile, en un esfuerzo por reparar el daño sufrido por víctimas de violaciones a los derechos humanos, ha efectuado una serie de esfuerzos tendientes a conceder la reparación del daño. Así la ley 19.123 y las demás normas conexas (como la ley 19.992, referida a las víctimas de torturas) han



Foja: 1

establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional. En ese orden de ideas, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas.

En cuanto a las reparaciones mediante transferencias directas de dinero, menciona que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, en concepto de:

a) Pensiones: la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech);

b) Bonos: la suma de \$41.910.643.367.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley 19.992; y

c) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.-

d) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$23.388.490.737.-

En consecuencia, a diciembre de 2019, el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.-

Afirma que, desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que se pueda valorar para poder saber cuál fue su impacto compensatorio.

Respecto de las reparaciones específicas indica que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de las leyes N° s 19.234 y 19.992 y sus modificaciones. La ley 19.992 y sus modificaciones estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las



Foja: 1

personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas. Así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad. Adicionalmente, cabe consignar que el actor recibió en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000.

En lo concerniente a las reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas, sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. En efecto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase. En este sentido, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS. Además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad cuentan con un equipo PRAIS en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios.

Finalmente, respecto de las reparaciones simbólicas, invoca una compensación satisfactoria mediante la construcción de memoriales, establecimiento de museos y obras afines.



Indica que de todo lo expresado hasta ahora puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los DDHH. Así las cosas, tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente.

En este punto el fallo *Domic Bezic, Maja y otros con Fisco* ha sido especialmente gráfico cuando afirma que una pretensión indemnizatoria es incompatible con los beneficios legales entregados por la Ley 19.123 pues *“aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria del daño moral cuyo resarcimiento pretende la acción intentada en este juicio y ellos son financiados con recursos fiscales, conforme se desprende de lo establecido en el Título VI de ese texto legal”*.

Lo anterior ha sido ratificado por la Excma. Corte Suprema que, en sentencia de casación de fecha 30 de enero de 2013, reiteró la incompatibilidad de la indemnización pretendida con los beneficios de fuente estatal por los mismos hechos.

Agrega que, diversas sentencias ya habían insistido en que el propósito de estas leyes fue precisamente “reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”¹⁸, lo que constituye un factor congruente con resoluciones de Tribunales Internacionales, relativas a la improcedencia de la indemnización.

Asimismo, opone a la demanda la excepción de prescripción extintiva, esgrimiendo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código



Foja: 1

Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescritas, se rechace la demanda en todas sus partes. Conforme al relato efectuado por la demandante, la detención ilegal y torturas que sufrió ocurrieron durante 5 días desde el 17 de septiembre de 1986. Es del caso que, entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 14 de noviembre de 2022, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil. En consecuencia, opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil, pidiendo que se acoja y se rechacen íntegramente la acción indemnizatoria deducida como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita.

En subsidio, en caso que el Tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil que contesta, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil. Asimismo, indica que no existe normativa alguna que establezca que en materia de Derechos Humanos, la acción derivada de un ilícito civil sea de carácter imprescriptible, citando al efecto jurisprudencia afín.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, opone alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y los montos pretendidos, toda vez que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerar o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente



Foja: 1

satisfactoria. Ha dicho la Excma. Corte Suprema: *“Por definición, el perjuicio moral no es de naturaleza pecuniaria. Esa fisonomía inmaterial que tiene, hace decir a los doctos que no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo imborrable, sino procurar que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido”*.

En subsidio de lo anterior, alega que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los tribunales.

Finalmente alega la improcedencia del pago de reajustes e intereses, los que sólo pueden devengarse en el caso que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme y ejecutoriada.

Concluye, solicitando tener por contestada la demanda civil, y en definitiva, acoger las excepciones y defensas opuestas, y rechazar la demanda en todas sus partes con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

A folio 13, el Tribunal tuvo por contestada la demanda.

A folio 14, obra réplica del actor, oportunidad en la cual procede a refutar las excepciones planteadas por el demandado.

A folio 17, consta dúplica del demandado, reiterando las alegaciones, defensas y excepciones expuestas en la contestación del libelo.

Por tratarse de un Juicio Especial de Hacienda, se omitió el llamado a conciliación.

A folio 18, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la instrumental que obra en autos.

A folio 33, se procede a citar a las partes a oír sentencia.



CONSIDERANDO:

1º) Que, comparece don Sebastián Varela Medina y doña Nicole Riquelme Rivas, abogados, compareciendo en representación de don Edgardo Alexis Tritini Lillo, dueña de casa (sic), todos domiciliados en Paseo Bulnes 108, oficina 73, de la comuna y ciudad de Santiago, deduce demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad del Estado en contra del Fisco de Chile, representada legalmente por el Consejo de Defensa del Estado, representado a su vez por doña Ruth Ernestina Israel López, abogada, ambos domiciliados en calle Agustinas n°1225, piso 4, comuna de Santiago, y conforme fundamentos de hecho y de derecho reseñados en la expositiva de esta sentencia, solicitando en definitiva a) se condene al Fisco de Chile a pagar a la demandante la suma de \$250.000.000 por concepto de daño moral *y en subsidio de lo anterior*, a la suma que el Tribunal estime ajustada a Derecho en consideración al daño provocado. Todo en virtud de la calidad de víctima que detenta; b) la suma a la cual sea condenada la demandada deba ser pagada más los reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las misma, *o en subsidio de lo anterior*, en la forma que el Tribunal determine; c) todo ello, con costas.

2º) Que, comparece don Marcelo Eduardo Chandía Peña, Abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado, ambos domiciliados en Agustinas N° 1225, piso 4°, Santiago, Región Metropolitana, contesta la demanda solicitando su total rechazo conforme excepciones y alegaciones que expone.

3º) Que, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta, ello al tenor de lo preceptuado en el artículo 1698 del Código Civil.

4º) Que, a fin de acreditar sus dichos la parte demandante rindió prueba instrumental que se singulariza a continuación: Carpeta con los Antecedentes sobre la calificación de víctima del demandante de autos don



Foja: 1

Edgardo Alexis Tritini Lillo, cédula nacional de identidad número 10.524.047-3, emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos; documento que da cuenta de la detención, lugares, organismos, antecedentes de tortura, y otros; Informe de Daño Psicológico de la demandante de autos don Edgardo Alexis Tritini Lillo , suscrito por don Javier Andrés Castro Alfaro, psicólogo del Programa de Atención y Reparación Integral en Salud y Derechos Humanos, PRAIS SSMSO; Características del daño y trauma en afectados directos de violaciones a los derechos humanos, emitido por el psicólogo Freddy Silva, coordinador equipo especializado PRAIS del servicio de salud Aconcagua, de fecha 16 de octubre de 2017; Publicación de Hernán Reyes, Psicólogo, denominado “Las peores cicatrices no siempre son Físicas: la tortura psicológica”, en la revista internacional Reviw of the red Cross, de fecha Septiembre de 2007, N° 867 de la versión original; Publicación de María Teresa Almaraz, psicóloga en la Serie monografía N°4, del centro de salud mental y derechos humanos CINTRAS, denominado “Aspectos psicosociales de la represión durante la tortura”; Estudio de salud mental en presos políticos en periodo de transición a la democracia, elaborado por el neuropsiquiatra Jacobo Riffo y la psicóloga Viviane Freraut, ambos del equipo de salud mental DITT, CODEPU; La tortura modelo de intervención elaborado por el equipo de salud mental, de la fundación de ayuda social de las iglesias cristianas FASIC; Exposición sobre el “Significado psicosocial de la tortura. Ética y reparación”, elaborado por la psicóloga Elisa Neumann y el psiquiatra Rodrigo Erazo, ambos del programa médico psiquiátrico de FASIC; Exposición sobre la tortura y el trauma, denominado “El viejo dilema de las taxonomías psiquiátricas”, elaborado por Carlos Madariaga, publicado en revista Reflexión N°28, ediciones CINTRAS, Santiago de Chile, marzo de 2002. Págs. 4-9; Exposición sobre la Tortura y trauma psicosocial, elaborado por Carlos Madariaga, Ponencia presentada en la Conferencia Internacional “Consecuencias de la Tortura en la Salud de la Población Chilena: Desafíos del Presente” realizada por el Ministerio de Salud los días 21 y 22 de junio de 2001 en Santiago de Chile y publicado en revista Reflexión N° 27, ediciones CINTRAS, Santiago de Chile, septiembre de 2001. Págs.5-9; Publicación sobre el “Trauma político y memoria social” elaborado por el instituto latinoamericano de salud mental y derechos



Foja: 1

humanos ILAS, Psicología Política, N° 6, 1993, páginas 95-116; Fallo de casación en Episodio “Comando Conjunto”, víctimas: Salinas, Pacheco y Gianelli. Rol N° 5831-2013; Fallo de casación en Episodio “Torres de San Borja”, víctimas: Montecinos, Slaughter, Adler Zulueta, Diaz Aguero, y otros Rol N° 2918-2013; Fallo causa “Marcón con Fisco de Chile”, Rol 222856-2015, de fecha 29 de diciembre de 2015, pronunciada por los Ministros Sr. Milton Juica, Sr. Hugo Dolmestch, Sr. Carlos Kunsemuller, Sr. Haroldo Brito y Sr. Lamberto Cisternas, dictamen preclaro al expresar que “bajo este prisma, la legislación nacional especial que aduce el Fisco que solo introduce un régimen de pensiones asistenciales, no contiene incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen, ni se ha demostrado que fue diseñada para cubrir todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, puesto que se trata de modalidades diferentes de compensación y que las asuma el Estado voluntariamente en su totalidad, no implica la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el régimen jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que franquea la ley” (considerando un decimo), de modo tal que rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por el Fisco de Chile, ordenando pagar a cada actora la suma de \$100.000.000; copia de Sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, ROL de ingreso N°8105-2018, de fecha 13 de junio de 2018, en que resuelve rechazar el recurso de casación en el fondo, intentado por el Consejo de Defensa del Estado, por adolecer de manifiesta falta de fundamentos, consolidando (en consecuencia) la indemnización de \$70.000.000, como resarcimiento del daño moral sufrido por la actora, hermana de un detenido desaparecido; Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 29 de noviembre de 2018, en causa caratulada “Ordenes Guerra y otros vs Chile”, Rol CDH-2- 2017, en virtud de la cual el Estado de Chile ha sido condenado al pago de indemnizaciones a víctimas de la dictadura cívico-militar cuyas acciones civiles impetradas fueron rechazadas por la justicia chilena por considerar que estaban prescritas. Se declara que el Estado de Chile es responsable por la violación del derecho de acceso a la justicia, en los términos de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, por cuanto se aplicó, en el



Foja: 1

pasado, una figura procesal formal, como es la prescripción, en juicios de reparación por el daño moral; Certificado del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que certifica que el demandante de autos don Edgardo Alexis Tritini Lillo, cédula nacional de identidad número 10.524.047-3, se encuentra calificado como víctima en el listado Valech, bajo el número 24.560; y, declaración Jurada de don Jorge Ulises Bravo García, cédula nacional de identidad número 10.154.514-8, otorgada ante doña Zarella Camerotto Moraga, Notario Público, Conservador y Archivero Judicial de la comuna de Santiago, con fecha 30 de Agosto de 2024.

5°) Que, la parte demandada rindió probanza, que obra a folio 23, consistente en respuesta a oficio solicitado por ésta, ORD.: DSGT N° 25891/2024, elaborado el 07 de agosto de 2024 emitido por el Instituto de Previsión Social que da cuenta de los montos por reparación de la ley N° 19.992 y 20.874 recibido por el actor.

6°) Que, el actor ha comparecido a estrados invocando la calidad de víctima de violación a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, motivo por el cual reclama por esta vía el resarcimiento del daño que los episodios que relata le causara.

7°) Que, del mérito de lo expuesto por las partes en la fase de discusión de autos y de la copia de Certificado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de fecha 05 de agosto del año 2024, aparejada a folio 22 y no objetado en contrario, se tiene por acreditado en el proceso que don Edgardo Alexis Tritini Lillo es víctima de violación a los derechos humanos, figurando bajo el número 24.560 en la denominada Comisión Valech I.

8°) Que, el Fisco de Chile opone excepción de prescripción extintiva de la acción civil indemnizatoria, fundado en que a pesar de encontrarse suspendida la prescripción durante el período de dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 30 de mayo de 2024, ha transcurrido con



Foja: 1

creces el plazo de prescripción extintiva que establece el artículo 2332 del Código Civil, o en subsidio aquel contemplado en el artículo 2515 del mismo cuerpo legal.

9°) Que, a fin de resolver la excepción de prescripción, cabe tener en consideración que la detención ilegal del demandante por agentes del Estado constituye un crimen de lesa humanidad y una vulneración a los derechos humanos. En efecto el hecho en cuestión vulnera lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, norma que establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a tratos crueles inhumanos o degradantes, así si bien la acción indemnizatoria tiene un contenido patrimonial obedece a una índole humanitaria proveniente de los derechos de todo ser humano reconocidos éstos en el Tratado Internacional indicado, que prima sobre las normas de derecho interno, en especial del artículo 2497 del Código Civil.

10°) Que, resulta improcedente dar cabida a la aplicación de normas comunes contenidas en los cuerpos normativos internos como el Código Civil para resolver la contienda en cuestión; en tal sentido el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos obliga a los estados parte a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades y el artículo 5 de la Constitución Política de la República que reconoce como limitación a la soberanía el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y la obligación del mismo de promover dichos derechos fundamentales.

11°) Que, dado que los derechos reconocidos en la Convención son inherentes al ser humano durante toda la existencia de éste, no es posible sostener a juicio de esta sentenciadora que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria por el mero transcurso de éste, ya que ello significaría desconocimiento del Derecho Humano conculcado.

12°) Que, sustenta lo anterior el artículo 131 del Convenio de Ginebra que sostiene que ninguna parte contratante podrá exonerarse, ni exonerar a



Foja: 1

otra parte contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra parte contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo 130 en el que se incluye la tortura o tratos inhumanos.

13°) Que, por lo demás, el que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad establezca en su artículo 4° la imprescriptibilidad de la acción penal a los crímenes mencionados en el artículo 1 entre otros, esto es los de lesa humanidad no conlleva necesariamente la exclusión de la imprescriptibilidad de la acción civil, máxime considerando el contexto del preámbulo de la convención en análisis, en especial aquellos de los párrafos 3, 4, 6 y 7.

14°) Que, a la luz de lo que se ha venido diciendo no cabe sino el rechazo de la excepción de prescripción.

15°) Que, luego el demandado deduce excepción reparación integral fundado en que el demandante ya ha sido indemnizado, ello en virtud de la dictación de la Ley N°19.123, que dispuso la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, la que se ha realizado a través de transferencias directas de dinero, asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas y reparaciones simbólicas.

16°) Que, con dicha alegación el Fisco reconoce, en el caso concreto, una necesidad de reparación y como consecuencia de ello un daño, el que esta sentenciadora entiende que corresponde al daño moral, esto es, toda afección que acarrea un agravio en las afecciones legítimas o de un derecho subjetivo inherente e inmaterial de una persona e imputable a la otra.

En el caso de autos, el perjuicio antes señalado se entiende corresponder al daño moral derivado por los diversos y sucesivos apremios ilegítimos de los que fue objeto el actor por parte de agentes del Estado de Chile, según se expusiera latamente en la parte expositiva de esta sentencia.



Foja: 1

17°) Que, efectivamente, tal y como lo señala el demandado al contestar la demanda, se han efectuado por el Estado chileno distintos y variados esfuerzos una vez terminado el régimen militar, de resarcimiento de perjuicios mediante pensiones asistenciales y simbólicas a todos aquellos que se encuentran en una situación como la del actor, las que han tenido un carácter general buscando una solución uniforme, abstracta, sin considerar la situación específica de cada ser humano que haya sido sujeto a apremios ilegítimos en dicho período, ello no configura lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al pago de una justa indemnización a los lesionados, esto es, a cada persona en específico, esta sentenciadora no considera acorde a la norma internacional mencionada que obliga al Estado chileno en virtud del artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política de la República, por lo que se desestimaré la alegación de suficiencia de pago.

18°) Que, siendo un hecho indubitado de la causa la calidad de víctima invocada por el actor, corresponde ponderar en autos la existencia del daño moral invocado en la demanda.

19°) Que, a fin de acreditar dicho ítem indemnizatorio, el actor acompañó copia no objetada de "Evaluación de Daño" de fecha 11 de marzo de 2019, elaborado y suscrito por don Javier Andrés Castro Alfaro, Psicólogo, el cual previa entrevista con el demandante y estudio de antecedentes médico-físicos, concluye que, por efectos del daño causado por la experiencia extrema del Terrorismo de Estado, éste sufrió de consecuencias psicológicas, las cuales producen en él sus efectos hasta la actualidad. En tal instrumento se destaca que el trastorno de estrés postraumático crónico remite a diversa sintomatología desarrollada tras el golpe de Estado y al hecho de haber sido víctima de diferentes violencias por parte de agentes de Estado, lo que implicó que desarrollara estado de alerta cuando se acercaba a lugares vinculados a su detención, sintiendo temor, períodos de vigilia y sueños traumáticos, es decir, sueños en que se reeditan vívidamente las violencias extremas.



Foja: 1

Incluso, la evaluación da cuenta que el actor niega la posibilidad de tener hijos y construir su propia familia, puesto que con el tiempo retomó la vida política y considera que esto podría poner en peligro a una posible familia en el caso que llegasen a ocurrir nuevamente hechos como los acaecidos durante el periodo de 1973 al 1990.

A su vez, se infiere que, el secuestro y prisión política (que conllevó diferentes violencias extremas como torturas), implicó un escenario de deshumanización que expone al evaluado a sensaciones de incertidumbre, inseguridad, trauma y miedo.

20º) Que, la probanza consistente en declaración jurada de don Jorge Ulises Bravo García, aportada en juicio, se encuentra desprovista de mérito probatorio toda vez que constituye un instrumento privado emanado de la propia parte que lo presenta, resultando insuficiente para tener por acreditado los hechos que se señalan en el documento.

21º) Que, en virtud de los hechos ilícitos y dolosos constatados en la causa y expresamente reconocidos por el Fisco de Chile, en relación a lo consignado en el Informe Evaluación de Daño antes detallado, esta sentenciadora tiene por acreditado en autos que el actor sufrió perjuicios extrapatrimoniales producto del actuar directo de agentes del Estado, por lo que conforme a criterios de justicia y equidad estos deben ser indemnizados atendida su gravedad. Por consiguiente, se hará lugar a la pretensión resarcitoria estimándose prudencialmente una indemnización por daño moral en la cantidad \$35.000.000.- en su favor.

22º) Que, en cuanto a la solicitud de reajustes e intereses, atendida la naturaleza declarativa de la presente sentencia, la suma ordenada deberá enterarse debidamente reajustadas de acuerdo con la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, más intereses corrientes para operaciones de crédito reajustables en moneda nacional, contabilizados desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada y hasta que se efectúe el pago efectivo.



Foja: 1

23°) Que, los demás antecedentes allegados al proceso en nada alteran lo resuelto precedentemente.

Y atendido lo antes razonado y lo dispuesto en los artículos 160, 170, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículo 48 del Código Orgánico de Tribunales; artículos 2332 y 2497 del Código Civil; Ley N° 19.992, ley N° 19.123; artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 14.1 de la Convención sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; artículos 1.1, 2 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; los Principios 15, 18 y 20 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, se declara:

I.- Que, se rechazan las excepciones de prescripción y reparación integral opuestas por el Fisco de Chile.

II.- Que, se acoge parcialmente la demanda de autos respecto del daño moral invocado, daño que esta sentenciadora estima prudencialmente en la suma de \$35.000.000. en favor de don Edgardo Alexis Tritini Lillo, más los reajustes e intereses reseñados en el considerando vigésimo segundo de este fallo.

III.- Que, no se condenará en costas al Fisco de Chile por estimar que tuvo motivos plausibles para litigar.

Notifíquese, regístrese y en su oportunidad archívense.

Pronunciada por doña Claudia Donoso Niemeyer, Juez Titular; autorizada por don Erwin Cárdenas Jofré, Secretario Subrogante.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, diecisiete de marzo de dos mil veinticinco**



